

Argelia a los 40 años de su independencia

Angel Lossada

EL 31 de octubre de 1994, con motivo de la celebración del 40 aniversario del inicio de la guerra de liberación nacional, el presidente del Estado argelino, general Liamín Zérual, leyó ante las cámaras de televisión un discurso sobre cuyo contenido habían estado especulando los medios de comunicación del país durante días, debido a que el complejo proceso de diálogo político iniciado durante los nueve primeros meses de su mandato no conseguía arrancar y la espiral de violencia que sufre el país desde hace dos años no hacía sino agravarse.

A lo largo de una hora, después de señalar que las causas de la crisis obedecen a que el mensaje de la revolución de noviembre ha sido pervertido por intereses personales, cálculos de castas, cinismo, nepotismo y derroche, contra los que el pueblo expresó su rechazo en octubre de 1988, pero frente a los cuales el poder no supo reaccionar y permitió la politización del islam, el presidente constató el fracaso de los esfuerzos de diálogo desarrollados hasta ahora, anunció la convocatoria de elecciones presidenciales antes de fines de 1995 y se comprometió a proseguir con firmeza la erradicación de la violencia y el terrorismo.

Para comprender la situación actual y valorar las posibilidades de que se reanude la búsqueda de una solución política negociada a la crisis, o de que, por el contrario, un bloqueo total de los intentos de arreglo político degenera en una confrontación violenta generalizada, es necesario tener presentes los intentos de solución, a menudo contradictorios, con los que se ha tratado de resolver una crisis política, económica, social, cultural y de identidad nacional y religiosa, que hunde sus raíces en fenómenos mucho más allá del mero “resurgimiento del islamismo”.

La mayoría de los analistas coinciden en el diagnóstico de las causas profundas de la crisis argelina; motivos que no sólo llevaron a una crisis abierta en octubre de 1988, a un régimen político incapaz de responder a las demandas más elementales de la población, sino que se encuentran en la base de las dificultades con las que tropiezan las fuerzas políticas para encontrar un recambio viable y eficaz.

Los disturbios de octubre de 1988, cuya represión podría haber alcanzado los quinientos muertos, pusieron sobre el tapete la necesidad de afrontar los errores del bumedianismo y los del propio

Angel Lossada es diplomático y licenciado en Derecho.

presidente, Chadli Benyedid: un sistema totalitario de partido único bajo el cual ha proliferado una tupida red de intereses y clanes que dan una enorme opacidad al ejercicio del poder; un crecimiento demográfico galopante que ha duplicado a una población cuyo 70 por cien es menor de 30 años y no comprende una retórica oficial anclada en viejas legitimidades históricas; el fracaso de un modelo económico colectivista que impidió el florecimiento de la iniciativa privada; el control estatal de la agricultura, generador de un abundante éxodo rural que ha creado un gran número de marginados, de enorme potencial explosivo y ha situado la dependencia alimentaria exterior de Argelia en más de un 90 por cien; el monopolio estatal del comercio exterior, fuente de sustanciosas comisiones; la nula diversificación de los recursos del Estado por exportaciones, un 95 por cien de las cuales están constituidas por productos energéticos; el aumento de la deuda exterior; una política de arabización selectiva y mal aplicada que, lejos de servir de elemento de cohesión de la sociedad, agudizó sus fracturas y contradicciones; una política de control estatal de la religión y de supresión de sus manifestaciones populares y tradicionales, tildadas de arcaísmos, que encuentra sus precedentes en la época colonial y que dejó el terreno abonado para la implantación y desarrollo de visiones políticas del islam, simplificadas, populistas y demagógicas, capaces de hacerse con la bandera del descontento de los marginados. En definitiva, las autoridades argelinas tenían que enfrentarse a las enormes fracturas que separaban, y aún separan, a los gobernados del sistema político y económico, a las existentes entre la generación de la independencia y la mayoría de la población y al desfase entre la retórica oficial sobre las constantes nacionales, elementos fundadores de la identidad argelina y su vivencia cotidiana.

A pesar de la profundidad de la crisis abierta, las autoridades argelinas fueron capaces de reaccionar, en aquel momento, con un proyecto de reformas relativamente coherente en cuya aplicación fue pieza clave el primer ministro Hamruche, nombrado en septiembre de 1989.

En el plano político, se hizo una reforma de la Constitución que suponía el abandono del sistema de partido único; se aprobó una ley de asociaciones políticas; se hizo efectiva la libertad de prensa, al amparo de la cual surgieron multitud de diarios independientes; y se estableció un calendario electoral que incluía la celebración sucesiva de elecciones municipales y legislativas. En el plano económico, se emprendieron distintas medidas, todavía tímidas, para liberalizar la economía.

Sin embargo, la amplia victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS) en los comicios municipales de junio de 1990 (4.331.472 votos) y la convocatoria de una huelga general en junio de 1991, fueron las primeras señales de alarma que anuncian el ascenso imparable de una fuerza política revolucionaria,

amparada en un discurso religioso simplista pero eficaz, que proponía un modelo de sociedad teocrática cuyo anclaje social fue posible gracias a la política de concesiones al islamismo, llevada a cabo por el régimen en años anteriores. Baste mencionar, a título de ejemplo, la promulgación en 1984 del Código de familia, una de las pesadillas del minoritario pero aguerrido movimiento feminista argelino.

A partir de este momento, todos los esfuerzos del régimen estuvieron dedicados a la contención del islamismo. El primer ministro Hamruche dimitió y fue sustituido por Gozali. Los líderes del FIS, Abassi Madani y Ali Bendahj fueron encarcelados y se declaró el estado de excepción durante cuatro meses. A pesar de todo, el proceso electoral siguió adelante, tal vez debido al excesivo optimismo de los pronósticos electorales de las autoridades: un tercio de los escaños para el FIS, un tercio para el Frente de Liberación Nacional (FLN) y el tercio restante para las demás fuerzas políticas. Así de simple. Sin embargo, la noche del 26 de diciembre de 1991, el ministro del Interior, Larbi Beljeir, anunciaba “con el semblante demudado y las manos temblorosas”, en palabras del escritor argelino Rachid Mimuni, que el FIS había obtenido 3.260.000 votos y acaparado en la primera vuelta de las elecciones 188 escaños. No cabía ninguna duda de que en la segunda vuelta obtendría la mayoría absoluta de los 430 escaños en liza.

La suspensión del proceso electoral

A pesar de ser espectaculares, es necesario matizar estos resultados si se quiere comprender el alcance real de la implantación social del FIS y el peso que tiene en la actualidad. En primer lugar, supusieron un descenso de cerca del millón de votos en relación con los obtenidos en las elecciones municipales de 1990. En segundo lugar, la abstención alcanzó el 41 por cien del censo y se presentaron numerosos recursos por irregularidades. Asimismo, hubo cerca de un millón de votos nulos. En tercer lugar, el sistema mayoritario elegido para las elecciones, con la idea de que podía beneficiar al FLN, acabó provocando una masiva atribución de escaños al FIS. Por último, es preciso destacar también, sin caer en arriesgadas elucubraciones, que los resultados del FIS incluían un buen número de votos de castigo al poder.

En cualquier caso, después de 26 años de régimen de partido único, el primer sufragio democrático de Argelia llevaba al poder a un movimiento que se proponía instaurar una nueva forma de dictadura. El desenlace ha sido el fracaso de la reforma democrática, de sobra conocido. El ejército, “escudo del Estado y punta de lanza del pueblo”, en recientes palabras del general jefe del Estado Mayor, Mohamed Lamari, animó a Chadli Benyedid a presentar su dimisión. La segunda vuelta de las elecciones fue anulada y, a través del Alto Comité de Seguridad, órgano constitucional de competencias puramente consultivas, se creó el Alto

Comité de Estado (ACE), presidencia colectiva con un mandato de dos años, al frente del país hasta el nombramiento del actual presidente, Liamin Zerual, en enero de 1994. A la cabeza de esta presidencia colegiada se nombró a Mohamed Budiaf, líder histórico de la revolución, de integridad probada por sus largos años de exilio en Marruecos.

Se ponía fin, así, a un experimento que tenía valor de prueba para todo el mundo árabe, pues mientras la mayoría de esos países optaban por la represión más o menos dura del integrismo, en Argelia se intentaba su integración institucional con la esperanza de marginarlo posteriormente en el contexto de una transición democrática. Independientemente de como se maticen los resultados electorales, lo cierto es que la palabra democracia perdió mucha credibilidad en esos días.

La suspensión del proceso electoral abrió, además, una fractura de enormes dimensiones en las fuerzas y partidos democráticos que ha hecho imposible la constitución, hasta el día de hoy, de un polo democrático capaz de sacar al país de la disyuntiva totalitaria. Desde entonces las fuerzas políticas han estado divididas entre quienes defienden la necesidad de incluir al islamismo en el marco político institucional y quienes rechazan cualquier diálogo o negociación con los islamistas, por considerar que en Argelia tiene lugar un enfrentamiento entre dos proyectos de sociedad mutuamente excluyentes sobre los que no es posible transigir.

El Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), partido miembro de la Internacional Socialista, liderado por Ait Ahmed, segunda fuerza política por número de escaños (25), obtenidos gracias a su fuerte implantación en Kabilia, y tercera por el número de votos (510.000), se opuso frontalmente a la anulación de las elecciones y desde entonces ha defendido que la única vía de solución pacífica de la crisis pasa por un diálogo nacional que incluya a los islamistas y en la que el ejército se comprometa firmemente a favor de la democracia.

El FLN, liderado por Abdelhamid Mehri, con 1.612.000 votos y 15 escaños, que hubieran aumentado en la segunda vuelta, pues en la primera sólo se atribuían a los escaños de las circunscripciones donde un partido hubiera obtenido más del 50 por cien de los votos, se opuso también a la anulación de las elecciones, colocándose así en una extraña situación de oposición que le ha provocado fuertes tensiones internas. Perdido su carácter de partido único, ha defendido la necesidad de integrar a los islamistas en la vida política, pero a diferencia del FFS, sobre él recaen las sospechas, cultivadas por otras fuerzas políticas, de que, con el pretexto del diálogo, podría estar buscando un acomodo de intereses entre los islamistas y la vieja guardia del régimen, dispuesta a pactar con el diablo con tal de mantenerse en el poder. No hace mucho tiempo, Said Sadi afirmaba que “el FIS es el FLN pintado de verde”. El Movimiento por la Democracia en Argelia (MDA), liderado

por el ex presidente Ben Bella, mantiene una postura similar a la del FLN.

Los llamados partidos islamistas moderados, Hamas y Ennahda, que a diferencia del FIS no buscan el acceso al poder y la instauración de un Estado islámico, sino una islamización de las bases de la sociedad, también se opusieron a la anulación de las elecciones y en numerosas ocasiones han hecho causa común con el FLN y el MDA.

La Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), liderada por Said Sadi, que no obtuvo escaños en las elecciones generales, pero que es muy activa en Kabilia donde compite con el FFS por el voto bereber, y el movimiento Etthadi, antiguo partido comunista, apoyaron activamente la anulación de las elecciones. Desde entonces han sabido captar, sobre todo el RCD, el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación francófonos de Argelia y de buena parte de la intelectualidad y de los cuadros medios de la administración y, en general, de los sectores que, en torno a la noción de ruptura, se identificaron con la línea de Budiaf y que han sido uno de los objetivos preferentes del terrorismo más radical.

Con alguna excepción agonizante (MAJD, PRA), el medio centenar de partidos restantes fueron barridos en las elecciones y, de no haber sido resucitados por el ACE, gracias al cual cuentan hoy con una nutrida representación en el Consejo Nacional de Transición, habrían desaparecido del mapa político argelino. Al frente del ACE, Mohamed Budiaf mantuvo desde el principio de su mandato un discurso político rupturista y de cambio creíble que le valió una cierta popularidad e inició una política de dureza frente al islamismo. Durante su mandato se produjeron la disolución del FIS, la apertura de los campos de internamiento del Sáhara, donde se concentraron a miles de islamistas, y la declaración del estado de emergencia por un año el 9 de febrero de 1992, todavía hoy en vigor.

Estas medidas fueron complementadas y ampliadas por sus sucesores en el ACE, que pusieron a punto una estrategia esencialmente policial y represiva para luchar contra el integrismo. Pieza clave en esta estrategia fue la promulgación el 30 de septiembre de 1992 de un “decreto legislativo contra la subversión y el terrorismo”, cuyo texto, todavía vigente, aumenta las penas para los actos que caigan en su ámbito de aplicación, limita las garantías procesales de los acusados por terrorismo, restringe la libertad de prensa en relación con la lucha antiterrorista y crea unos tribunales especiales para enjuiciar estos delitos. Posteriormente se disolvieron las asociaciones culturales y caritativas de corte islámico vinculadas al FIS y se declaró el toque de queda nocturno, también hoy en vigor, en la capital y en otras wilayas (provincias) circundantes. En el mes de marzo de 1993 comenzó una mayor participación del ejército en las operaciones de “peinado” de zonas rurales y barrios conflictivos de la capital. La creciente impli-

cación del ejército en la lucha sobre el terreno será una constante a lo largo de todo este período, especialmente tras el ascenso del general Mohamed Lamari a la jefatura del Estado Mayor del ejército en julio de 1993.

Como resultado de todo ello, el FIS pasó en bloque a la clandestinidad y desapareció completamente de la vida política durante casi dos años, salvo por algunas declaraciones de sus líderes en el exilio, a lo largo de los cuales se agudizan las contradicciones internas de un movimiento que ya antes de las elecciones estaba escasamente cohesionado y en el cual había sectores que cuestionaban la necesidad de pasar por un juego democrático para acceder al poder. Obviamente, la anulación de las elecciones, la política de dureza mantenida hasta la fecha y la decapitación política del FIS han terminado por fortalecer a los sectores más radicales y a los grupos armados, muchos de los cuales parecen estar fuera de todo control.

Tras el asesinato, aún no aclarado, del presidente Budiaf en Annaba, el 29 de junio de 1992, Ali Kafi se puso al frente del ACE y Belaid Abdesalam, uno de los artífices de la industrialización pesada de la época de Bumedian, se hizo cargo de la presidencia del gobierno en sustitución de Gozali. Abdesalam fue cesado un año más tarde, en agosto de 1993, después de haber intentado poner en práctica una política económica de austeridad que iba a contrapelo de los esfuerzos liberalizadores anteriores y cuya inviabilidad fue pronto manifiesta. Su sucesor, Redha Malek, que ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores, dio un giro de ciento ochenta grados a la política económica, estableciendo bases claras para la liberalización de la economía por medio de un programa de ajuste para el período abril de 1994-marzo de 1995 y un acuerdo de tipo *stand-by* con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 1994, firmado ya durante el mandato del presidente Zerual.

El programa de ajuste tiene como objetivos principales, el retorno a las tasas de crecimiento anteriores a la crisis, la estabilización macroeconómica, reduciendo las presiones inflacionistas y la mejora progresiva de la balanza por cuenta corriente. El gobierno argelino deberá proceder, además, a la adopción de una política de cambios realistas, la liberalización de las restricciones comerciales y de los precios y a disciplinar las políticas monetaria y presupuestaria. Por su parte, el acuerdo *stand-by* supone un aporte financiero de mil millones de dólares y, tras la firma del acuerdo marco para el reescalonamiento de la deuda, firmado con el Club de París en el verano de 1994, el gobierno argelino está negociando, en la actualidad, acuerdos bilaterales que aligerarán el peso de la deuda sobre sus ingresos de divisas. Este programa de reformas tiene, sin embargo, unos importantes costes sociales a corto plazo, que podrían acabar produciendo tensiones sociales o incluso movimientos de protesta a pesar de los mecanismos de amortiguación previstos.

Desde el punto de vista político, la gestión del ACE ofrece un balance mucho menos alentador. A comienzos de 1993, Ali Kafi lanzó un proceso de “diálogo político” cuyos objetivos incluían la convocatoria de una conferencia nacional, en la que se elaboraría una plataforma de consenso y una reforma constitucional, y la celebración de un referéndum en diciembre de 1993. Las limitaciones y cortapisas de este diálogo y la negativa de la práctica totalidad de los partidos representativos a participar en él, hicieron imposible cualquier avance. Para evitar el estancamiento, el ACE se embarcó en un diálogo multitudinario con más de setenta pequeños partidos, organizaciones profesionales, sindicatos y asociaciones de empresarios públicos y privados, auténtico baile de siglas, que no consiguió cubrir el vacío dejado por la ausencia de interlocutores políticos representativos. En ningún momento de esta fase se consideró la posibilidad de incluir al FIS en la restringida vida política oficial.

La búsqueda de un consenso político

En octubre de 1993, cuando sólo faltaban tres meses para el fin de su mandato y la inviabilidad de su gestión política era evidente, el Alto Comité de Estado anunció la creación de una Comisión para el Diálogo Nacional (CDN) independiente, en la que participaban tres generales del ejército y a la que otorgó plenos poderes para sacar el diálogo político de la fase de bloqueo en la que se encontraba. Esta comisión desplegó sus esfuerzos durante cuatro meses, hasta la celebración de la conferencia nacional de transición, en enero de 1994, con dos objetivos esenciales que logró sólo a medias: encontrar un mecanismo de sustitución del Alto Comité que, en ausencia de otras instituciones políticas, evitase al ejército la necesidad de intervenir directamente en la vida política, y obtener un consenso lo más amplio posible sobre el marco institucional y político, objetivos y duración de la transición.

De estas fechas datan los primeros contactos con el FIS, llevados a cabo por el propio Liamín Zerual, entonces ministro de Defensa, y las primeras medidas, muy parciales todavía, de conciliación. Pero todavía no se contemplaba en absoluto la participación del partido disuelto, sino que se abría la posibilidad de que algunos de sus líderes, incluso agrupados con otras siglas y previa condena de la violencia, pudieran participar en la conferencia nacional. Esta oferta, que habría supuesto la ruptura total del FIS, chocó frontalmente con la estrategia de los islamistas: sólo acudirían al diálogo después de haber sido rehabilitados en su conjunto y tras un debate interno que permitiera alcanzar una posición común a las diversas tendencias de la corriente.

Finalmente, los esfuerzos de la CDN se saldaron con la celebración, los días 25 y 26 de enero de 1994, de la conferencia nacional de consenso, en la que, con la excepción de Hamas, no participó ningún otro partido político representativo. A pesar de todo, apro-

bó la plataforma propuesta por el ACE, que establecía los objetivos y límites de la transición y preveía la creación de un Consejo Nacional de Transición, atípico parlamento que se constituyó en abril de 1994. Sin embargo, la conferencia nacional de transición, probablemente consciente de sus limitaciones, no tuvo más remedio que encargar al Alto Comité de Seguridad, *alter ego* del ejército, la elección del nuevo presidente, que recayó en el ministro de Defensa, Liamin Zerual, quien se encontraba, por tanto, con una situación que distaba mucho de estar encauzada, salvo en el terreno económico. La necesidad de continuidad en la política económica explica el mantenimiento de Redha Malek al frente del gobierno hasta la firma de los acuerdos con el FMI en marzo, a pesar de que pronto surgieron discrepancias entre aquél y el presidente del país, al abordar el espinoso asunto del diálogo político con el FIS. Estas discrepancias están probablemente en el origen de su sustitución por el actual jefe de gobierno, el sexto desde octubre de 1988, Mokdad Sifi, tecnócrata de elevado perfil, que concentra sus esfuerzos en las reformas económicas iniciadas por Malek.

La política de seguridad y orden público, dirigida por el ejército, tampoco ha sufrido grandes cambios en cuanto a la lucha contra los grupos armados, aunque desde los primeros contactos de la CDN con el FIS se cerraron los campos de internamiento del sur y, con algunas excepciones temporales, los tribunales especiales antiterroristas han dejado prácticamente de funcionar.

Sin embargo, las medidas policiales y militares adoptadas hasta ahora han sido incapaces de quebrar la espiral de violencia. El goteo de atentados contra las fuerzas de seguridad, iniciado durante el mandato de Boudiaf, ha dado lugar a una violencia generalizada que afecta a todos los sectores sociales y que se ha cobrado diez mil vidas, según fuentes oficiales, treinta mil, según los partidos de la oposición. Junto a operaciones de gran envergadura llevadas a cabo por grupos armados de tipo guerrillero, que parecen buscar el control de zonas rurales, especialmente de las regiones montañosas del norte del país, otros grupos, como el GIA, practican un terrorismo ciego y brutal contra todos los sectores de la población argelina, terrorismo que ha costado la vida a cientos de intelectuales, escritores, periodistas y profesores y a sesenta y nueve extranjeros, tres de ellos españoles. Por su parte, la dureza de la represión ha motivado numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos tanto por parte de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos, que ha acusado a las fuerzas de seguridad de torturas y ejecuciones sumarias, como por parte de Amnistía Internacional, cuyo último informe describe un panorama de tintes muy sombríos.

Ya en febrero de este año el jefe del Estado afirmó que la política de seguridad no basta para solucionar la crisis y anunció que se proponía iniciar un “diálogo sin exclusiones” en el marco, eso sí, de los objetivos señalados en la plataforma de consenso apro-

bada en enero por la conferencia. En marzo de 1994, después de un mes de Ramadán especialmente sangriento, durante el cual las fuerzas políticas que apoyaron la suspensión del proceso electoral en 1992, hicieron una durísima campaña para bloquear cualquier posibilidad de diálogo con el FIS, que encontró ecos favorables incluso en la presidencia del gobierno, el presidente del Estado convocó una nueva ronda de diálogo con los partidos políticos legales.

El único resultado de esta iniciativa fue la constitución de un Consejo Nacional de Transición (CNT), órgano al que la plataforma otorga competencias legislativas y de control de gobierno y cuyos doscientos escaños se distribuyeron entre 30 partidos políticos (ninguno de ellos, salvo Hamas, mínimamente representativo), 46 asociaciones de todo tipo y 30 representantes de distintas instituciones del Estado. Se pasaba así, la última página del multitudinario diálogo llevado a cabo por el ACE. Desde entonces, el CNT no ha tenido ninguna relevancia política y ninguno de los partidos representativos está presente en el marco político institucional.

Hasta el pasado mes de agosto no tuvieron lugar nuevas iniciativas. En esos meses, mientras la violencia seguía aumentando de forma imparable, la restringida vida política argelina discurrió al compás de unas cuantas manifestaciones populares convocadas por los partidos políticos de distinto signo, de las que ninguna fue un éxito. En todo caso, si algo probaron fue la incapacidad de los partidos políticos para adoptar posiciones conjuntas capaces de movilizar a una población atenazada por la violencia.

Los días 8 y 24 de agosto y 5 y 20 de septiembre, el presidente Zerual se reunió en cuatro ocasiones con el FLN, el MDA, Hamas, Ennahda y el PRA. El FFS, haciendo gala de gran desconfianza hacia el poder, excusó su asistencia y lo mismo hicieron el RCD y Ettahadi, reiterando su posición de que no hay diálogo que valga si no se define antes un proyecto de sociedad inequívocamente democrático, fórmula con la que se rechaza habitualmente el diálogo con el FIS.

Estos encuentros, teniendo en cuenta la falta de capacidad de movilización popular de los participantes, poco podían aportar en sí mismos a la búsqueda de una solución política a la crisis, pero permitieron al presidente formalizar públicamente los contactos desarrollados por sus representantes con los líderes del FIS detenidos en la prisión de Blida (los muy conocidos Abassi Madani, Ali Benhadj, Abdelkader Omar, Nuredine Chigara y Kamel Guemmazi). Como explicó el propio Zerual durante su tercer encuentro con los partidos, el 23 de agosto, Abassi Madani le escribió una carta en la que contemplaba la posibilidad de hacer un llamamiento a la tregua a todas las "facciones de la resistencia" y esbozaba las líneas generales de un plan de solución de la crisis que debería obtener, eso sí, el visto bueno del resto del liderazgo del FIS. Sobre esta base, los representantes de la presidencia mantuvieron varios contactos con los detenidos de Blida, a los que siguió una nueva carta de Madani en la que se negaba a debatir cualquier aspecto de su carta

anterior, en tanto no fueron puestos en libertad para poder encontrarse con el resto de sus “hermanos del FIS”, tanto en el interior como en el exterior del país, para evaluar las medidas necesarias para la solución de la crisis. Estas propuestas fueron calificadas, tanto por el presidente como por los partidos presentes en el diálogo, de elementos positivos en la solución de la crisis.

Las exigencias del FIS

Días después, tras la publicación por la prensa argelina de insistentes rumores sobre fuertes discrepancias entre Madani y el más radical Benhadj, los cinco detenidos de Blida hicieron pública una carta conjunta en la que, además de reiterar su exigencia de ser liberados para poder continuar discutiendo con el poder, afirmaban que sólo después de reunirse con las directivas del FIS del interior y del exterior y de los grupos armados estarían en condiciones de formular una propuesta de negociación. Esta postura es la clave de toda la estrategia del FIS hasta el momento, y refleja no sólo su desconfianza sobre la posibilidad de que con el señuelo del diálogo se intente romper su unidad interna, sino la importancia que tras dos años de clandestinidad han adquirido los grupos armados en el seno de la corriente islamista. Por el momento, el liderazgo político no está dispuesto, probablemente debido a su desconfianza sobre las intenciones del poder, a negar la cobertura política a estos grupos.

En este contexto, el martes 13 de septiembre Abassi Madani y Ali Benhadj fueron trasladados de la prisión militar de Blida a la residencia Djenane-el-Mufti, en el centro de Argel, con libertad de establecer comunicación telefónica con el exterior y de recibir visitas. Ese mismo día fueron liberados los otros tres líderes detenidos en Blida. Esta medida suponía un paso evidente hacia la rehabilitación política del FIS e introducía un elemento radicalmente nuevo en las perspectivas de solución de la crisis.

La necesidad de dejar que esta repentina reaparición del FIS en la vida política tomara cuerpo, hacía inútil proseguir el diálogo con los partidos, toda vez que el presidente no logró obtener la participación de un FFS dividido entre su desconfianza crónica hacia el poder, que le hace temer un pacto entre el régimen y el FIS a espaldas de la democracia, y su postura sobre la necesidad de integrar a éste en la búsqueda de una solución. Por tanto, en el último encuentro con los partidos, el presidente cerró esta fase de encuentros multilaterales señalando, sin embargo, que el diálogo seguiría abierto a través de contactos bilaterales y subrayando que debería proseguir, sin interrupción, hasta que se alcanzasen sus objetivos que son: “el fin de la violencia, el buen desarrollo de una transición en la que todos participen y la celebración, lo antes posible, de unas elecciones”. Las reuniones bilaterales, bien acogidas por el FFS, tuvieron lugar durante el mes de octubre, pero se saldaron sin novedades.

A la vez, la puesta en residencia vigilada de Abassi Madani y Ali Benhadj y la liberación de los otros tres detenidos desató una durísima campaña de las fuerzas políticas opuestas frontalmente al diálogo. El líder del RCD hizo público un comunicado en el que afirmaba, entre otras cosas: “Argelia llora a sus muertos por miles. Este es el balance de un régimen (...) que organiza hoy la rendición nacional contra el integrismo para asegurar su supervivencia”. Buena parte de la prensa francófona adoptó la misma línea de dureza con titulares como “Colusión de un clan del poder con el FIS: la república en peligro de muerte” (*Liberté*, 18 de septiembre de 1994). También el ex primer ministro, Redha Malek, se embarcó en este frente, publicando una carta en el diario *El Watan* en la que rechazaba de plano la medida. Por último, se produjeron reacciones incluso en el gobierno, cuya portavoz y secretaria de Estado para la Solidaridad Nacional y la Familia, Leila Aslaui, dimitió en señal de desacuerdo. Muy significativa es también la reactivación, en esas fechas, de la reivindicación bereber en Kabilia, sostenida sobre todo desde sectores afines al RCD, así como la proliferación en la prensa francófona de noticias y reportajes sobre la formación en esa zona del país de células de resistencia armada ciudadana que se declaraban dispuestas a defender a la patria frente a los ataques de los islamistas.

Mientras tanto, los distintos líderes del FIS se limitaban a reiterar en sus declaraciones públicas el contenido de la carta conjunta de los cinco detenidos de Blida y a pedir, insistente, la total liberación de Madani y Benhadj. La imposibilidad del FIS de elaborar una postura conjunta en el plazo de un mes, que no puede achacarse exclusivamente a la permanencia en residencia vigilada de Madani y Benhadj, da una idea de lo revueltas que están las aguas en el interior de la procelosa corriente islamista.

Todo este proceso sufre un parón en seco tras el discurso del presidente Zerual de 31 de octubre, en el que culpa del fracaso del diálogo a los partidos políticos, tildándole de incapacidad para consensuar sus posiciones, tanto entre sí como con el Estado, y descarta al FIS como interlocutor, acusándole de falta de voluntad para contribuir a la paz, de complicidad con la violencia, de tener una visión dictatorial de la democracia y de no desechar nada más que la conquista del poder, todo ello sobre la base de una correspondencia enviada por Ali Benhadj al dirigente del GIA, Cherif Gusmi, alias Abdou Abdallah, encontrada en el cadáver de éste por los servicios de seguridad y que ha sido presentada como prueba de la colusión existente entre este grupo terrorista de gran brutalidad y el FIS.

Durante el mes que ha transcurrido desde entonces, la situación política argelina sigue muy confusa y la violencia no ha cesado de aumentar y cobrarse nuevas víctimas. Los partidos políticos han reaccionado de forma diversa, que va, nuevamente, desde quienes deploran la suspensión del diálogo y consideran inviable la cele-

bración de las elecciones (FFS, FLN, MDA, Hamas y Ennahda) y quienes, como el RCD y Ettahadi, no ocultan su satisfacción por el bloqueo de los contactos con el FIS, pero expresan sus dudas sobre las elecciones, si no tiene lugar un diálogo en las condiciones que ellos reivindican. Las autoridades argelinas se declaran abiertas al diálogo, pero no precisan más, al tiempo que anuncian que han comenzado los preparativos para la celebración de las elecciones presidenciales.

Por su parte, distintos líderes del FIS han afirmado en los últimos días no sólo su voluntad de seguir dialogando, sino que todavía tienen lugar contactos entre la presidencia y los líderes de esta corriente. Asimismo, los medios de comunicación argelinos se han hecho eco de una carta en la que Abassi Madani pide al presidente Zerual que siga siendo el hombre de la solución y afirma que “la lectura policial y unívoca de las cartas de Benhadj, sin tener en cuenta su dimensión política, no es una prueba de las buenas intenciones del poder, que se ha apresurado a tomar una iniciativa que ha conducido al Estado a cometer errores tan importantes como nuestro encarcelamiento, la suspensión del proceso electoral y la disolución del FIS”. Esta lectura política, difícil, teniendo en cuenta la brutalidad de los métodos utilizados por el GIA, sólo puede consistir en pensar que Benhadj estaba intentando reconducir al GIA a la órbita de los grupos armados que, como el AIS, parecen ser leales a las decisiones del liderazgo político del FIS. En cualquier caso, resulta muy preocupante que un grupo como el GIA haya logrado obtener, gracias a dos años de lucha armada y decapitación política del FIS, el peso suficiente como para no poder ser marginado en la búsqueda de una solución política.

En definitiva, lo que estos meses han puesto de relieve es el estrecho margen de maniobra y los obstáculos a los que se enfrentan quienes buscan una solución negociada de la crisis: la fragmentación de unas fuerzas políticas democráticas divididas no sólo en torno a sus programas, sino sobre las posibilidades de entendimiento con el islamismo y que han sido, hasta el momento, incapaces de movilizar a esa inmensa mayoría de la población que les votó o se abstuvo en las elecciones de 1991; las dificultades con que tropiezan las autoridades argelinas para llevar a cabo la anhelada ruptura con las prácticas del pasado, y la disparidad de criterios, incluso en sus propias filas, sobre el tratamiento del islamismo; y las tensiones internas en la corriente islamista, cuyos líderes, que fueron capaces de capitalizar el descontento popular, corren el riesgo de acabar convirtiéndose en rehenes de grupos armados cada vez más radicales.

La mayoría de las negociaciones para acabar con un conflicto empieza cuando todavía no ha corrido la sangre o cuando ya ha corrido demasiada. En Argelia ya es tarde para lo primero. Por tanto, el reto más urgente que tienen las fuerzas políticas argelinas es encontrar un marco político pacífico para resolver las dife-

rencias de todo tipo que las separan y reconducir a un enfrentamiento violento que ya se ha cobrado excesivas víctimas.

La existencia de una buena parte de la población polarizada y articulada por una visión mesiánica y simplificadora del islam es una realidad política que es preciso reconocer si se quiere llegar a una solución; como también lo es que otro gran número de argelinos, desmovilizados por la violencia y la falta de perspectivas, no comparten ese proyecto y esperan que se produzca una profunda renovación del sistema político argelino.

Sobre esas bases y con la participación tanto de las fuerzas políticas representativas, como de las instituciones del Estado, elemento indispensable en cualquier solución, la búsqueda de un consenso mínimo no sería un peligroso acto de voluntarismo, sino un ejercicio del más elemental realismo político.

Dos años de violencia creciente permiten pensar que intentar solucionar la crisis argelina con métodos violentos o sobre la base de planteamientos excluyentes, no haría sino agravar las tensiones existentes y podría conducir a un derramamiento de sangre aún mayor.